

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 16° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-27146-2019
CARATULADO : FISCO DE CHILE/ESPINOZA

Santiago, veintidós de Mayo de dos mil veintitrés

Vistos:

Que, con fecha 4 de septiembre de dos mil diecinueve, comparece doña Ruth Israel López, abogada procuradora Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, quien deduce acción de indemnización de perjuicios en contra de don Luis Fernando Espinoza Padilla, ignora profesión u oficio, domiciliado en Pasaje Elqui N° 312, comuna de Cerrillos.

Que, con fecha 23 de octubre de dos mil diecinueve, se celebra comparendo de contestación y conciliación con la asistencia del apoderado de la demandada. En este, se tuvo por contestada la demanda al tenor de lo señalado en escrito de igual fecha, y por frustrado el llamado a conciliación.

Que, con fecha 26 de noviembre de dos mil diecinueve, se recibe la causa a prueba.

Que, con fecha 3 de mayo de dos mil veintitrés, se citó a las partes a oír sentencia.

Considerando:

Primero: Que, comparece doña Ruth Israel López en representación del Fisco de Chile, quien deduce acción de indemnización de perjuicios en contra de don Luis Fernando Espinoza Padilla, ya individualizados.



Foja: 1

Funda su acción en el hecho que entre los años dos mil seis y dos mil diecisiete, funcionarios públicos adscritos a distintos estamentos y departamentos de Carabineros de Chile, con funciones en custodia de caudales públicos del organismo, formaron una asociación criminal para sustraer o consentir que terceros sustrajeran el dinero que estaba bajo su cuidado, aprovechando posiciones, conocimiento e información, además de eludir durante años del control interno de la institución.

En esta maquinaria participaron otros civiles que facilitaban medios para la sustracción del dinero, los que a la fecha ascienden a la suma de \$28.348.928.198 pesos.

Con fecha 12 de agosto de dos mil diecinueve, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en causa RIT N° 16286-2018, se dictó sentencia condenatoria en contra 12 de los 42 imputados, entre los cuales está el demandado de los presentes autos, por el delito de malversación de caudales públicos y lavado de activos.

Respecto a la contraria, dicha sentencia afirma que en el esquema participaba suministrando medios e instrumentos bancarios para que se sustrajeran los caudales públicos de las cuentas institucionales de Carabineros. En este sentido, disponía la utilización de una cuenta bancaria para que la cuenta corriente de carabineros realizara transferencias de dinero, las cuales fueron de \$21.322.250 pesos.

El demandado, una vez depositado el dinero en su cuenta, practicaba retiros para ser entregados en efectivo a otros miembros de la organización criminal, los que después eran redistribuidos entre ellos.

De este modo, siendo declarado culpable del delito de malversación de caudales públicos y de lavado de activos, el daño cuya indemnización de solicita indemnizar es de \$21.322.250 pesos, que son los establecidos en la sentencia comentada en los párrafos anteriores.

En su argumentación de derecho, comenta que la acción indemnizatoria nace del ilícito penal acreditado en dicha sede. Ello, de conformidad a lo establecido en los artículos 1437 y 2314 del Código Civil.



Foja: 1

Ahondando, menciona que el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil establece las formas de hacer valer una sentencia condenatoria de sede penal ante la competencia de esta magistratura, produciéndose efecto de cosa juzgada del pronunciamiento de fecha 12 de agosto de dos mil diecinueve en los presentes autos.

Previas citas legales, solicita tener por deducida acción de indemnización de perjuicios en contra don Luis Fernando Espinoza Padilla, ya individualizado, y en definitiva, declarar:

A.- La condena al pago de la suma de \$21.322.250, por concepto de monto defraudado a Carabineros de Chile.

B.- Que, dicho monto deberá reajustarse de conformidad a las variaciones al Índice de Precios al Consumidor desde la fecha en que se cometió el delito y hasta el pago efectivo de la obligación.

C.- Se condene al pago de los intereses corrientes al capital reajustado desde la mora, hasta el pago efectivo.

Todo, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, en audiencia de contestación y conciliación, el demandado contesta la demanda, solicitando su rechazo fundado en los siguientes elementos.

En primer lugar, comenta que no es procedente la acción de perjuicios, toda vez que la sentencia dictada en sede penal en autos RIT N° 16286-2018, lo condenó a la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, una multa de 2 Unidades Tributarias Mensuales y la pena accesoria de suspensión de cargo y oficio público durante la condena, por el delito en calidad de autor de lavado de activos del artículo 27 de la Ley N° 19.912 y de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, una multa de 3 Unidades Tributarias Mensuales y la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua de cargos y oficios público, por el delito en calidad de autor de malversación de caudales públicos.



Foja: 1

Así, en ninguna parte de la comentada resolución se desprende la obligación indemnizatoria pretendida por el Fisco de Chile. Incluso, no es posible establecer la existencia de algún perjuicio que haya sufrido la actora.

De este modo, es la contraria quien debe acreditar todos los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, circunstancia que no ocurre en autos.

Por otra parte, en virtud de los hechos delictivos por los que fue condenado, la acción civil correspondiente no es la de indemnización, sino que, muy por el contrario corresponde a la de restitución de los dineros obtenidos de forma ilícita. Ello, porque en autos no existen daños a reparar, sino bienes a restituir.

Ahondando, fundamenta que dar a lugar a una indemnización de perjuicios daría un claro enriquecimiento injustificado a favor del Fisco, puesto que la acción restitutoria seguiría incumplida.

En otro apartado, expone que el único competente para declarar la existencia de un perjuicio o de restitución de dinero es el tribunal en sede penal, tópico que no realizó por encontrarse firme y ejecutoriada la sentencia.

En segundo lugar, argumenta que la obligación indemnizatoria, en caso de existir, es una simplemente conjunta o mancomunada, siendo obligado únicamente a su cuota. Ello, por aplicación del artículo 1511 del Código Civil, que establece la simple conjunción como regla general para el caso de obligaciones con pluralidad de sujetos.

De esta forma, la presunta indemnización debe dividirse entre los otros condenados, siendo así rebajada a la suma de \$1.776.854 pesos.

Tercero: Que, de los escritos de discusión, se obtiene como hecho pacífico el que con fecha 12 de agosto de dos mil diecinueve, en autos RIT N° 16286-2018, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dictó sentencia condenatoria por el delito de malversación de caudales públicos y lavado de activos, entre los cuales figuraba el demandado en calidad de autor.



Foja: 1

Cuarto: Que, de esta forma, la discusión de los presentes autos radica en determinar la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual y, en caso afirmativo, si la obligación indemnizatoria es una simplemente conjunta.

Quinto: Que, a fin de acreditar sus dichos, la actora acompaña en tanto instrumentos probatorios los siguientes documentos.

- I. Acta de lectura de sentencia de causa RIT 16286-2018, emitida por el 7° Juzgado de Garantías de Santiago.
- II. Resolución de corrección de transcripción de sentencia de causa RIT 16286-2018, emitida por el 7° Juzgado de Garantías de Santiago.
- III. Certificado de ejecutoria de la sentencia de causa RIT 16286-2018, emitida por el 7° Juzgado de Garantías de Santiago.

Sexto: Que, a fin de acreditar sus dichos, la parte demandada acompaña en tanto prueba instrumental copia de la sentencia condenatoria de fecha 12 de agosto de dos mil diecinueve, emitida por el 7° Juzgado de Garantías de Santiago de causa RIT 16286-2018.

Séptimo: Que, de igual forma, con fecha 27 de octubre de dos mil veintidós, se recibió oficio del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, recibándose el acta de lectura de sentencia de la causa RIT N°16286-2018.

Respecto a la improcedencia de la acción de perjuicios, alegada como defensa por la parte demandada en su contestación a la demanda.

Octavo: Que, el artículo 2314 del Código Civil establece que: *“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito.”*

Noveno: Que, en este sentido, el profesor Enrique Barros ha comentado que: *“Aunque en épocas tempranas parecen no haber estado distantes, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal han llegado a*



Foja: 1

ser distintas entre sí, por sus fines y condiciones de interposición (...) Sin perjuicio de las diferencias entre ambos ordenamientos, una misma conducta puede ser constitutiva, a la vez, de un delito o cuasidelito civil y de uno penal; es el caso del delito penal que ocasiona un daño indemnizable.”¹

Décimo: Que, en este sentido, independiente de la pena que la legislación penal establezca para el delito de lavado de activos y malversación de caudales públicos, dicho hecho en sí puede generar un daño que debe ser reparado por el autor, siendo acciones independientes la una de la otra.

De este modo, cabe distinguir la acción penal propiamente tal, de la acción civil indemnizatoria, toda vez que apuntan a objetivos distintos, pudiendo incluso darse el caso de que una no prospere y la otra sobreviva y sí lo haga.

Undécimo: Que, incluso, el hecho de no haber ejercido la acción indemnizatoria en la sede paralela no implica en modo alguno que no se pueda perseguir por vía civil ante esta jurisdicción, por medio del procedimiento sumario del artículo 680 N°10, toda vez que el ejercicio en alguna de las dos magistraturas se conforma como una opción para la actora.

En este sentido, citando nuevamente al profesor Barros Bourie, nos indica que: *“Durante la tramitación del procedimiento penal, la víctima puede deducir respecto del imputado cualesquiera acciones que tengan por objeto perseguir la responsabilidad civil derivada del hecho punible. En todo caso, la víctima tiene un derecho de opción de ejercer esas acciones ante el tribunal civil correspondiente. Con todo, admitida a tramitación la demanda civil en el procedimiento penal, no se puede deducir nuevamente ante un tribunal civil”²*

¹ BARROS BORUIE, Enrique (2006) Capítulo XI Acciones a que da Lugar el Daño. Título II Relación Jurídica Procesal en Ejercicio de la Acción Civil en el Proceso Penal. En *“Tratado de Responsabilidad Extracontractual”* (p.p 947-961) Santiago. Editorial Jurídica de Chile

² *Ibid.*



Foja: 1

Duodécimo: Que, lo anterior, lleva a descartar la argumentación referente a la improcedencia de la acción civil indemnizatoria del Fisco de Chile en contra el demandado de autos por los hechos establecidos en la sentencia de causa RIT N°16286-2018, por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Lo anterior, es sin perjuicio de la determinación de la concurrencia de los elementos para configurar la responsabilidad civil extracontractual, que se analizará a continuación.

Respecto a la concurrencia de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, demandada por el Fisco de Chile con fecha 4 de septiembre de dos mil diecinueve.

Décimo tercero: Que, nuestro ordenamiento jurídico a la hora de establecer el régimen de responsabilidad civil extracontractual establece como elementos para su concurrencia los siguientes:

- A) Acción ilícita libre de un sujeto capaz.
- B) Ser realizada dicha acción con dolo o negligencia.
- C) Que el demandante haya sufrido un daño y
- D) Que entre la acción culpable y el daño exista una relación causal suficiente para que pueda ser atribuido al hecho culpable.

Décimo cuarto: Que, para efectos de analizar los dos primeros requisitos, se debe tener presente el artículo 176 del Código de Enjuiciamiento fija que: *“Corresponde la acción de cosa juzgada a aquel a cuyo favor se ha declarado un derecho en el juicio, para el cumplimiento de lo resuelto o para la ejecución del fallo (...)”*

Por su lado, la disposición número 178 del Código de Procedimiento Civil establece que: *“En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado”*

Igualmente, el artículo 180 del mismo cuerpo fija que: *“Siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, no será lícito en*



Foja: 1

éste tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento.”

Décimo quinto: Que, respecto a esta idea, la doctrina ha establecido que: *“De la norma del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil se sigue que frente a una sentencia penal condenatoria no puede el juez civil poner en duda la existencia del hecho que constituye el delito, ni la culpa del condenado (...) En el fondo, lo que no puede hacer el juez civil es contradecir lo expresamente resuelto en sede penal, sea que se trate de cuestiones de hecho o cuestiones de derecho.”*³

Décimo sexto: Que, en este sentido, del mérito probatorio de la sentencia acompañada por ambas partes, se logra acreditar las siguientes circunstancias.

Entre los años dos mil seis y dos mil diecisiete, por medio funcionarios públicos de Carabineros de Chile y civiles formaron una organización criminal que tenía como objetivo el sustraer caudales públicos que, a fecha de desarrollo de dicho juicio penal, ascendía a la suma de \$28.348.928.198 pesos.

Dicha organización diseñó una estrategia de ocho pasos para efectos de sustraer el dinero de la institución, el cual abarca desde una fase de estudio del sistema, de caudales susceptibles a sustraer, planificación y ejecución de maniobras informáticas y financieras, fraccionamiento y distribución de los dineros y captación de nuevos miembros.

En este sentido, el juzgador penal estableció que don Luis Fernando Espinoza Padilla puso a disposición productos bancarios a efectos de llevar a cabo la sustracción de los caudales públicos, para luego realizar distintas maniobras tendientes a desvincularlos de su origen ilícito.

Así, el monto que habría sustraído y lavado el demandado en autos ascendería a la suma de \$21.322.250 pesos, provenientes de la cuenta de Carabineros de Chile que se usaba para desahuciar.

³ *Ibid* (p.p 962-973)



Foja: 1

Dicho actuar, se calificó jurídicamente como delitos de lavado de dinero y malversación de caudales públicos. Los fundamentos que sirvieron para que esa magistratura adquiriese la convicción más allá de toda duda razonable fueron los antecedentes de la investigación penal y la aceptación expresa de los hechos acusados por parte de don Luis Fernando Espinoza Padilla.

Décimo séptimo: Que, de esta forma, acreditándose las dos primeras circunstancias del considerando décimo tercero, cabe entrar al análisis del daño y del vínculo causal de dicho hecho ilícito.

Décimo octavo: Que, se ha entendido como daño emergente aquella disminución patrimonial producto de la pérdida de un valor activo o aumento en los gastos que sufre una persona a consecuencia de un determinado hecho.⁴

Décimo noveno: Que, del valor probatorio de la sentencia penal acompañada por ambas partes, se logra acreditar de manera suficiente que el Fisco de Chile sufrió una pérdida patrimonial efectiva de \$21.322.250 pesos.

Vigésimo: Que, a efectos de establecer el vínculo de causalidad entre el daño anteriormente descrito y el hecho ilícito señalado en los considerandos décimo tercero a décimo sexto, se obtiene la convicción de que dicho perjuicio tiene como condición *sine qua non* el actuar ilícito del demandado.

Ello, porque una simple eliminación fáctica del mismo, permite arribar a la conclusión de que la pérdida patrimonial no se produciría.

Todo lo anterior, sirve de construcción suficiente para alcanzar la convicción de que se reúnen todos los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, debiendo así acogerse la acción deducida a lo principal, con fecha 4 de septiembre de dos mil diecinueve.

⁴ *Ibid* Capítulo IV Daño (p.p 215- 372)



Foja: 1

Respecto a la naturaleza simplemente conjunta de la obligación indemnizatoria alegada por la demandada en su contestación a la demanda.

Vigésimo primero: Que, el artículo 1511 del Código Civil fija que: *“En general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito.*

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o insólidum.

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley.”

Por su parte, el artículo 2317 del cuerpo legal citado fija que: *“Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, salvo las excepciones de los artículos 2323 y 2328.*

Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso.”

Vigésimo segundo: Que, de esta forma, siendo el hecho descrito en los presentes autos un ilícito civil, existiendo fuente legal expresa que así lo establece, no es efectivo que la obligación indemnizatoria sea una simplemente conjunta, sino que, por el contrario, todos los autores del hecho son solidariamente responsables del mismo.

Vigésimo tercero: Que, a más ahondamiento, cabe considerar que lo perseguido en los presentes autos no es la totalidad del dinero defraudado por los condenados de la sentencia dictada por el 7° Juzgado de Garantía en causa RIT N° RIT N°16286-2018, sino que únicamente la indemnización del daño generado por el demandado, don Luis Fernando



Foja: 1

Espinoza Padilla que, como se dijo, ascendió a la cantidad de \$21.322.250 pesos.

Vigésimo cuarto: Que, lo anterior, es sin perjuicio de los eventuales derechos que posee el demandado respecto a los codeudores solidarios, en caso de ser procedente.

Por estas consideraciones, y en virtud de lo establecido en los artículos 1511 y siguientes, 1698, 2314 y siguientes todos del Código Civil; 144, 160, 170, 177 y siguientes, y 680 y siguientes todos del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Se **ACOGE** la acción de indemnización de perjuicios incoada a lo principal, con fecha 4 de septiembre de dos mil diecinueve.

II.- Se condena a don Luis Fernando Espinoza Padilla al pago de la suma de \$21.322.250 pesos, por concepto de indemnización derivada de los hechos ilícitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos.

Dichas sumas deberán ser pagadas reajustadas de acuerdo al reajuste que sufra el Índice de Precios al Consumidor desde la notificación de la demanda, con más intereses corrientes para operaciones reajustables, desde la fecha en que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

III.- Habiendo sido completamente derrotado, se condena en costas al demandado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° C-27146-2019.

Pronunciada por don Luis Enrique Parra Aravena, Juez Suplente.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintidós de Mayo de dos mil veintitrés**



